

PODER JUDICIAL DE TUCUMÁN

CENTRO JUDICIAL CAPITAL
JUZGADO DEL TRABAJO II

ACTUACIONES N°: 1982/13



H103023776470

JUICIO: JOTALE MORA MARIA FLORENCIA Y OTRO C/ COLEGIO GIOSUE
CARDUCCI S/ SUMARISIMO.-

San Miguel de Tucumán, 27 de junio de 2016.-

AUTOS Y VISTO: Para dictar sentencia definitiva en
los autos caratulados: JOTALE MORA MARIA FLORENCIA Y OTRO C/ COLEGIO
GIOSUE CARDUCCI S/ SUMARISIMO, de donde,
RESULTA

Que a fs 5/14, se presenta la letrada Maria Belen Ramayo, quien manifiesta ser
apoderada del Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP). y asimismo
conforme el poder Ad litem que acompaña, es apoderada de la Prof. Maria Florencia
Jotale Mora, y en su nombre y representación viene a iniciar la presente acción por
reinstalación en el puesto de trabajo de la mencionada co-actora en contra del
Instituto Giosue Carducci, fundando el mismo en lo normado por los arts 47, 48, 50,
52 y cc de la Ley 23.551, atento al caracter de Candidata a delegada Sindical en
ejercicio al momento de producirse el despido, y en el art 47 de la citada normad,
atento al caracter de trabajador despedido por realizar actividad sindical.-

Asimismo se reclaman los salarios caídos desde la fecha del despido y hasta su
efectiva reinstalación en su puesto de trabajo con costas.-

LEGITIMACION Y COMPETENCIA: Manifiesta que la legitimación de SADOP para
iniciar la presente acción surge del ámbito de actuación sindical, personal y territorial
del Sindicato Argentino de Docentes Particulares como entidad de primer grado
reconocida y con personeria Gremial N° 90 por Resolución del Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social, siendo uno de los derechos de las asociaciones sindicales,
defender ante el estado y los empleadores los intereses individuales y colectivos de
los trabajadores.-

En cuanto a la competencia la misma encuentra fundamento en el art 63 Inc a), b) y
c) de la Ley de Asociaciones Sindicales n° 23.551.-

CONDICIONES DE ADMISIBILIDAD: Manifiesta que el art 52 de la ley 23.551,
faculta a los trabajadores amparados por la tutela de los arts 40, 48 y 50 qu fueran
despedidos o que sufrieren modificaciones en sus condiciones de trabajo, a
demandar judicialmente por la vía sumarísima la reinstalación en su puesto de
trabajo y el restablecimiento de sus condiciones laborales.-

Asevera que la Prof Florencia Jotale Mora, notificó su decisión de ser candidata a
Delegada Gremial del Sindicato Argentino de Docentes Particulares SADOP y a su
empleador, Colegio Giosue Carducci en fecha 17/06/13 encontrándose al día del
despido vigente su candidatura, destacando que la citada es afiliada de hace varios
años de SADOP, en primer término por el Instituto 9 de Julio y luego por al Colegio
Carducci siendo colaboradora constante en las tareas de afiliación en sus lugares de
trabajo.-

Citando la CD por la cual se notifica el despido de la co-actora, manifiesta que la
misma ratifica la postura antisindical de la demandada, quien a sabiendas de la
protección legal otorgada a su mandante actuó con desprecio y no siguió los
procedimientos previstos por la normativa vigente, dejando por ende expedita la vía

sumarísima.-

ESTABILIDAD ABSOLUTA: Resaltando lo normado por el art 52 de la ley 23.551, asevera que no existen dudas que en caso de necesidad de despido, el empleador puede hacer cesar la tutela acreditando en un proceso sumarísimo la causal de excepción a la estabilidad sindical.-

VIOLACION DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES: Manifiesta que el obrar de la demandada ha quebrantado las garantías de derecho de los trabajadores y las Asociaciones Sindicales establecidos en los arts 3, 6, 7 y 8 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Ratificado por la ley 23.313).-

A continuación hace expresa mención de lo establecido en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, los convenios de la OTI N° 87, 98 y 135.-

VIAS RAPIDAS A LA LUZ DE LA C.N: Establece que, tanto las normas de la tutela sindical generales, el amparo sindical del art 47, el art 43 del nuevo texto constitucional, como la ley antidiscriminatoria, otorgan acciones rápidas y plenas tendientes a la reparación del bien jurídico tutelado con jerarquía constitucional.-

Manifiesta, que en este caso, el bien jurídico tutelado con jerarquía constitucional es la Libertad Sindical, en especial la de representación y la protección de los representantes gremiales para el cumplimiento de su gestión sindical.-

Citando doctrina aplicable al caso; establece que de ninguna manera resultan incompatibles la aplicación del art 52 de la Ley 23.551 (Acción de reinstalación) con las normas antes citadas, ya que nos encontramos ante juicios sumarísimos de amparo especiales (art 47 de la Ley 23.551). Asimismo realiza un exhaustivo análisis de lo normado por el art 75 inc 22, cita doctrina.-

VISION AMPLIA DEL ART 47 LEY 23.551: Manifiesta, que independientemente de todo lo expresado, la presente acción de reinstalación también se funda en el art 47 de la ley 23.551, ya que este se refiere a cualquier acto de discriminación. En este caso, al impedimento y obstaculización en el ejercicio regular de los derechos de la Libertad Sindical. Hace referencia que el art mencionado no diferencia entre entidades simplemente inscriptas y entidades con personería, sino que lo otorga a trabajadores y entidades sindicales que fueron afectadas en el ejercicio de la libertad sindical.-

Cita jurisprudencia, y asevera que la empleadora en el caso concreto de autos, "impide y obstaculiza" el ejercicio regular de los derechos garantizados por el art 4 de la misma Ley, el cual establece que "...los Trabajadores tiene los siguientes derechos sindicales: "... desarrollar actividades sindicales..", quedando conforme se probará en autos expedita la vía del art 47 atento a que el despido de la actora se produce por su actividad sindical.-

HECHOS

Relatando los hechos, manifiesta que la Profesora María Florencia Jotale Mora, comenzó a trabajar para la demandada, el día 01/05/12 tal cual consta en la instrumental que se adjunta (recibos de sueldo) prestando funciones como docente, dictando la asignatura Ingles, con 6 horas cátedra secundarias.-

Así las cosas, la Profesora Jotale Mora, luego de la convocatoria a elecciones del Sindicato Argentino de Docentes Particulares SADOP, comunica su voluntad de presentarse como Candidata a Delegada de Personal Docente en fecha 17/09/13 al Sindicato Argentino de Docentes Particulares SADOP, y al Colegio Giosue Carducci, mediante CD31857766/7 y CD 31857767/5 respectivamente, las cuales acompaña.-

Así las cosas el día 19/06/13, con presiones, malos tratos verbales, según consta en denuncia policial que acompaña, el Sr Representante Legal del Colegio demandado, de muy mala manera y sin motivo alguno maltrato a su mandante y realizó un acta donde la acusa injustamente de no haber cumplido su tarea, por ello su mandante remite telegrama laboral en donde intima el cese de los hostigamientos y maltrato

verbal, considerando dichos actos, en relación directa con su candidatura a delegada comunal.-

Dicha misiva, es contestada en fecha 26/06/13 por la hoy accionada, y así lo hace el Prof Conti Alberto Antonio a título personal, en donde rechazar todos los términos de la carta enviada, y agrega que fue su mandante quien se dirigió de manera inapropiada, lejos de la verdad y constituyendo absurdas excusas a los fines de dejar salvada su postura, intimando a cesar conducta difamatoria y hace reserva de accionar a tales fines.-

Así las cosas, decidieron presentarse como candidatas a delegadas, dos docentes más de la demandada, en fecha 19/06/13 Dra Monica Casal y Prof. Victoria Lopez Bravo y Silvia Elena Villafañe, conforme consta en notas que acompaño, siendo todas las misivas de idéntico tenor.-

En virtud de ello, una de las candidatas efectuó una impugnación a la candidatura de la Prof Jotale, esgrimiendo que la misma no reunía la antigüedad de ley como afiliada, como consecuencia de ello, y atento a que en los Registros figuraba que la candidata Monica Casal había renunciado en fecha 11/12/98 como afiliada a SADOP, se remiten ambos casos a la Junta Electoral Nacional a los fines de su resolución, por lo que se notifica la suspensión de la elección de delegados a la empleadora en fecha 02/07/13, hasta tanto la Junta Electoral Nacional se expida ante esta situación.-

En fecha 02/10/13 la Junta Electoral notifica la resolución, por la cual rechaza la impugnación deducida en contra de la afiliada María Florencia Jotale Mora, ratificando que la misma se encuentra protegida por la tutela Sindical prevista en la ley 23.551 y normativa reglamentaria.-

Detalla las misivas remitidas por la demandada y resalta la animosidad que las mismas demuestran, de la que siempre fuera objeto la actora por parte del Colegio demandado, a tal punto inventan una situación para proceder a su despido "Con causa". Detalla las misivas relativas a dicha situación.-

IMPOSIBILIDAD DE DISCUTIR LA CAUSA DEL DESPIDO: Establece que la ley 23.551 ha consagrado la estabilidad absoluta del representante Sindical, reglamentando la garantía del art 14 bis de la CN, debiendo, para hacer cesar esa estabilidad, el empleador acreditar la existencia de justa causa y obtener una resolución judicial de exclusión de tutela sindical, constituyendo esto último, una condición sine qua non para la validez de la modificación de las condiciones de trabajo. Ofrece Pruebas y plantea reserva del Caso Federal.-

Así las cosas, citadas las partes a la audiencia que prevee el art 401 del CPC YC supletorio, comparece el letrado Alberto P.J. Claps, quien procede a contestar la demanda por escrito, bajo las siguientes consideraciones.-

Luego de una negativa general, procede a relatar los hechos, manifestando en primer lugar que se procedió al despido con causa de un trabajador que no gozaba de los beneficios de la tutela sindical, es decir con la estabilidad generada a partir de las disposiciones de los arts 40, 48, 49, 50 y 52 de la Ley 23.551.-

Luego de transcribir lo normado por los citados artículos y de poner de resalto las condiciones para ser candidato, expresa que corresponde evaluar si la actora reunía las condiciones personales necesarias, en segundo lugar si fue o no candidata al momento del distracto y finalmente si el proceso electoral reunía los requisitos establecidos por la normativa de aplicación.-

Así las cosas, destaca, que la actora, no reunía las condiciones personales para ser delegada de personal, ya que la misma no tenía la antigüedad en la afiliación de un año exigida por la normativa del caso. Surge asimismo que la actora en su escrito de demanda presenta una ficha de afiliación, la cual no tiene fecha cierta, por lo tanto desconoce si la misma fue realizada para la interposición de la acción y carece de

antigüedad que argumenta la demandante, por lo que en definitiva no se encuentra acreditada la condición de afiliado de un año que argumenta la demanda, destacando que la afiliación debe ser en el establecimiento no en otro lugar de trabajo diferente al que se pretende representar como delegado de personal.- Asimismo pone de resalto, que la actora no era candidata al momento del distracto.- Funda lo manifestado, por cuanto la condición de candidato no se alcanza por el mero voluntarismo de un trabajador que pretenda ser delegado, debe cumplir cierto requisitos legales que surgen de las disposiciones de la Ley 23.551 y decreto 467/88, debiendo la candidatura esencialmente ser admitida por los órganos con competencia en SADOP, es decir, que la misma sea oficializada.- Asimismo asevera, que la condición de candidato de la misma por disposición de SADOP, quedó sujeta a la resolutive de la Junta Electoral Nacional, quien consideró que Jotale Mora era candidata mediante CD recibida en fecha 23/10/13 es decir a posterior del despido de la misma, por lo tanto no es posible que haya estabilidad dado que la condición de candidato fue comunicada con posterioridad al distracto.- Resalta, con respecto a la actora SADOP, que el desarrollo del proceso electoral, que pretendía plasmar, no fue desarrollado con regularidad, atento a que no se fijó un cronograma electoral que indique; fecha de presentación de candidatura, fecha de resolución de candidatura, exhibición de la resolución de candidatos, período de impugnación etc.-

Los comicios se suspenden el día 03/07/13, luego de suspendió la realización de los comicios de fecha 29/10/13, y en fecha 22/10/13 se notifica a su mandante la suspensión del proceso electoral de fecha 29/10/13, porque existe una convocatoria previa pendiente de resolución por la Junta Nacional Electoral del SADOP, poniendo de especial resalto que el despido de Jotale Mora se materializó en fecha 15/10/13.- A continuación, destaca que el proceso electoral de elección de delegados debe ser notificado al Ministerio de Trabajo de la Nación, no habiendo la accionante acreditado dicha circunstancia.-

Por último, asevera que un requisito esencial para que el delegado o candidato goce de los beneficios de la tutela sindical, es que el mismo pertenezca a una entidad con personería gremial, destacando asimismo, que la personería gremial de SADOP no le otorga a este último el ámbito de actuación sobre la Pcia de Tucumán, no teniendo una aplicación específica en la Provincia a los fines de generar la tutela sindical sobre los candidatos, detallando cuales son las entidades que ejercen la representación sindical de docentes públicos y privados de Tucumán.-

FALTA DE PERSONERÍA: Manifiesta que el poder otorgado de SADOP a los profesionales intervinientes proviene de una sustitución de poder, el cual estaba vinculado a la vigencia de un mandato de la persona que sustituyó el mismo, pero a la vez el texto se desprende que el mandatario de SADOP que sustituye el mandato no es abogado.-

Ofrece prueba instrumental y formula reserva.-

Por ello, y las pruebas ofrecidas y producidas que dan cuenta el informe de fecha 06/11/15, quedan los presentes en estado de ser resueltos, por ello.-

CONSIDERANDO

Traídos los autos a resolver corresponde determinar en primer lugar cuales son los puntos motivo de la presente controversia a tratarse.-

PERSONERIA GREMIAL SADOP: Corresponde en primer lugar, establecer que el SINDICATO ARGENTINO DE DOCENTES PARTICULARES (SADOP) goza de la Personería Gremial N° 90, con facultades de representación en los términos del artículo 31 y concordantes de la Ley Nacional de Asociaciones Sindicales, al personal docente, en actividad o jubilado que ejerza o haya ejercido en Colegios, Establecimientos, Institutos, Academias, etc., privados, ya sean autónomos,

adscriptos, autorizados o libres, primarios, secundarios, universitarios, de enseñanza directa o por correspondencia, como asimismo toda aquella persona que se dedique a la actividad docente por cuenta propia, siempre que no sea propietaria de establecimiento privado de enseñanza.-

Así las cosas, la personería gremial del SADOP resulta de las Resoluciones 27/48, 152/53 y 491/90; las dos primeras de la entonces Secretaría de Trabajo y Previsión; la última del Ministerio de Trabajo de la Nación. Todos los actos constitutivos de la personería gremial del SADOP fueron publicados en el Boletín Oficial de la Nación.- En efecto, dichas resoluciones no han sido cuestionadas y/o impugnadas jurídicamente, por lo que atento a su firmeza debe considerárselos como "patrimonio" de la entidad sindical, con todas las garantías constitucionales que protegen la propiedad colectiva de los afiliados.

Conforme a ello, la Resolución 27/48, en su artículo 2º establece "otórgase personería gremial al Sindicato Argentino de Docentes Particulares..., con el carácter de sindicato que agrupa a los educadores de escuelas particulares, teniendo zona de actuación la Capital Federal". siendo extendida la zona de actuación del SADOP a todo el territorio de la Nación, mediante la Resolución 152/53, por considerarla suficientemente representativa, según las pautas del decreto ley 23.852/45, ratificado por ley 12.921, manteniendo la reforma el ámbito personal de actuación.

Teniendo en cuenta lo expresado ut supra; la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sentó un primer precedente de fecha 04/07/03, en una acción de amparo colectiva que promovida por SADOP- en la que se declaró la inconstitucionalidad con efecto colectivo del Decreto PEN 1123/1999-, en autos "SINDICATO ARGENTINO DE DOCENTES PARTICULARES -SADOP.- c./ ESTADO NACIONAL - PODER EJECUTIVO NACIONAL- s./ acción de amparo", sentó una nueva jurisprudencia en materia de legitimación activa de las asociaciones sindicales, para accionar judicialmente por la vía constitucional de amparo. (T y SS, 2003 –711, con comentario del Sr. Magistrado Doctor Mario Fera, T y SS, 2003-699; La Ley, 30 de octubre de 2003, con comentario del suscripto).

Por lo tanto, y teniendo en cuenta que las pruebas informativas producidas por la parte demandada no han producido en el sentenciante la convicción que podría lograr desvirtuar la personería gremial de la accionante, advierte el proveyente que, no resulta ilegítima la actuación procesal que se ha otorgado en autos al sindicato accionante ya que a la luz de las actuaciones, cuenta con la respectiva personería gremial, y por lo tanto encargada de representar frente al Estado y los empleadores, tal es el caso de autos, los intereses individuales y colectivos de los trabajadores (art. 31, ley de asociaciones sindicales N° 23.551).-

FALTA DE PERSONERIA: En el caso de autos, surge que SADOP, por intermedio de su Secretario General, Sr.Horacio Alfredo Ghilini, confiere poder general Judicial y Administrativo a favor de la Sra María Teresa Hernandez Vazquez, a fin de que esta los represente ante la Justicia Federal u Ordinaria de la Provincia de Tucumán, quedando expresamente sentado en dicha actuación notarial (fs 18) "...pudiendo la apoderada sustituir el presente".-

Así las cosas y conforme escritura n° 135 del 8/07/09 pasada por ante la escribana de la Ciudad de Buenos Aires, Mabel Benigna Tomasini, la Sra Hernandez Vazquez, sustituye el poder otorgado, en favor de los Dres María Belen Ramayo Hernandez y/o Luis Andres Sanna (fs 17).-

Conforme a ello, corresponde poner de resalto lo normado por el art 1327 del C.C "Sustitución del mandato. El mandatario puede sustituir en otra persona la ejecución del mandato y es responsable de la elección del sustituto, excepto cuando lo haga por indicación del mandante....", siendo este el único artículo que se avoca al

tratamiento del tema de sustitución de mandato, del cual se infiere que no encuentra la prohibición de sustituir el mismo, atento a que directamente el legislador se propone regular el instituto, sin hacer expresa mención de si se trata de un objeto prohibido o no, dando, a entender del suscripto, que dicho acto jurídico resulta permitido a la luz de la ley argentina.-

En ese orden de cosas, nuestro derecho no presume el ejercicio personal del poder, sin perjuicio que el mismo se otorga de acuerdo a las condiciones personales del apoderado-

Reiterando lo antes referenciado, del precepto invocado se deduce que, a el apoderado puede transferir a otra persona todas o algunas de las facultades que el poder le confiere de actuar en nombre ajeno, con las regulaciones y limitaciones especificadas para el caso, por lo que considero no hacer lugar al planteo de Falta de Personería deducido por la demandada.-

TUTELA SINDICAL: Con respecto a ello debemos realizar una diferenciación, dado que ocurre el caso, que no todos los sindicatos tienen los mismos derechos reconocidos por ley. En efecto, los sindicatos con simple inscripción (también llamados “simplemente inscriptos”, o con “personería jurídica”) tienen menos derechos que los sindicatos con personería gremial, poniendo de resalto que la personería gremial es un atributo de los sindicatos más representativos, que brinda al sindicato que la obtiene ciertos derechos que le son exclusivos.-

Así las cosas La tutela sindical es una protección especial que la ley otorga a favor del representante sindical, delegados de personal etc, afiliados al sindicato con personería gremial, y electos conforme la ley. Dicha Tutela es otorgada tanto a electos como a los simples candidatos que manifiestan su intención de presentarse a las elecciones a celebrarse.-

Dicha tutela en el caso de los delegados gremiales, tiene particularidades propias, atento a que, el contrato de trabajo que lo vincula con su empleador sigue vigente, lo que implicaría también la vigencia del derecho del empleador de sancionar a su empleado, suspenderlo etc y hasta de despedirlo, situación que resultaría anómala, ya que de ser así, el representante sindical no podría ejercer una verdadera representación, estaría siempre con el temor a ser despedido y/o suspendido.-

Para ello, la ley ha establecido una tutela especial, y gracias a ella, a dichos trabajadores no se les puede modificar las condiciones de trabajo, ni se los puede sancionar, ni despedir sin causa. Si el empleador suspende sin causa a ese representante sindical, modifica sus condiciones de labor, o lo despide, ese acto es nulo, pudiendo el representante sindical pedir judicialmente que se lo deje sin efecto (art 52 ley 23.551).-

Entedidas así las cosas, corresponde establecer también desde cuando comienza la protección, es decir cuando tiene nacimiento el derecho del representante gremial, y lo es desde el momento de la comunicación al empleador, mediante telegrama, carta documento u otra forma escrita, de su intención de presentarse al acto eleccionario a celebrarse, extendiendo su duración al tiempo en que dura el mandato y, una vez cesado éste, dura por un año más.-

Conforme a ello, podemos adentrarnos en decidir si la actora profesora María Florencia Jotale Mora, gozaba de tutela sindical al momento del despido acaecido en autos.-

En efecto, realizando un breve raconto de la situación tenemos en cuenta que, conforme lo afirmado y probado (intercambios epistolares) por la actora (Sra Jotale), la misma notificó su decisión de ser candidata a delegada Gremial a SADOP y a su empleador, Colegio Giosue Carducci en fecha 17/06/13.-

Conforme a ello, y producto de una impugnación a la candidatura de la hoy actora, se comunica la suspensión de las elecciones en fecha 02/07/13, hasta tanto la junta

electoral se expida sobre la misma, resolución dictada en fecha de fecha 02/10/13, donde confirma la candidatura de la Prof. Jotale Mora por los motivos allí expresados, con lo cual no quedan dudas a cerca de la postulación de la misma, no entrando a discusión tampoco, adedir de la demandada, las condiciones que la misma podría reunir a los fines de ser candidata, atento a que en dicha resolución especifican y ratifican dicha candidatura.-

Entendidas así las cosas, corresponde poner de resalto lo normado por el art 50 de la ley de Asociaciones Sindicales, "A partir de su postulación para un cargo de representación sindical, cualquiera sea dicha representación, el trabajador no podrá ser suspendido sin justa causa, ni modificadas sus condiciones de trabajo, por el término de seis (6) meses..." situación esta que conforme fuera referenciado anteriormente se encuentra debidamente acreditada.-

Asimismo dicho articulado continúa: "...Esta protección cesará para aquellos trabajadores para cuya postulación no hubiere sido oficializada según el procedimiento electoral aplicable y desde el momento de determinarse definitivamente dicha falta de oficialización. La asociación sindical deberá comunicar al empleador el nombre de los postulantes; lo propio podrán hacer los candidatos....", situación esta que tambien fue realizada, tanto por la actora como ratificada por la entidad gremial, atento el oficio recepcionado por este juzgado y glosado a fs 167/68, donde SADOP, deja constancia que "...la Sra María Florencia Jotale Mora es candidata a delegada gremial a partir de la presentación de su candidatura en fecha 17/06/13....".-

Por ello, considero que en autos se encuentra debidamente acreditado que la Sra Jotale Mora gozaba de la tutela sindical que por ley le corresponde, conjuntamente con la protección, derechos y obligaciones que de ella emanan.-

Ahora bien, atento a la protección antes referenciada y tutelada por el art 52, "... no podrán ser suspendidos, despedidos ni con relación a ellos podrán modificarse las condiciones de trabajo, si no mediare resolución judicial previa que los excluya de la garantía, conforme al procedimiento establecido en el artículo 47.....", es decir, la ley establece que, si el empleador afirma que existe una justa causa para tomar esa decisión de manera previa, debe iniciar un juicio, que se denomina "procedimiento de exclusión de tutela", y que tiene por objeto que el Juez o Tribunal preste conformidad con la realización de tal acto.-

En caso contrario y ante la violación por parte del empleador de las garantías establecidas y citadas ut supra, dará derecho al afectado a demandar judicialmente, por vía sumarísima, la reinstalación de su puesto, con más los salarios caídos durante la tramitación judicial, o el restablecimiento de las condiciones de trabajo.-

Asimismo debemos poner de resalto que; "La Carta Internacional Americana de Bogotá (de 1948)", sancionó una Declaración de los Derechos Sociales del Trabajo, y estableció: "los miembros de las directivas sindicales, en el número que fije la respectiva ley durante el periodo de elección y mandato, no podrán ser despedidos, trasladados de empleo ni desmejorados en sus condiciones de trabajo, salvo por causas justificadas, calificadas previamente por la autoridad competente" (Art. 26). Conforme a ello, El convenio N° 87, adoptado por la Conferencia en 1948, con vigencia desde el 04/07/1950, ratificado por nuestro país, por ley 14.932/59, regula el derecho de sindicación y de negociación colectiva; garantiza a los trabajadores y empleadores, sin ninguna distinción, el derecho de constituir organizaciones, así como de afiliarse a éstas, con la sola condición de observar sus estatutos.

Por otro lado el Convenio 98 de la OIT establece: Art. 1: 1. Los trabajadores deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical en relación con su empleo. 2. Dicha protección deberá ejercerse especialmente contra todo acto que tenga por objeto: a) sujetar el

empleo de un trabajador a la condición de que no se afilie a un sindicato o a la de dejar de ser miembro de un sindicato; b) despedir a un trabajador o perjudicarlo de cualquier otra forma a causa de su afiliación sindical o de su participación en actividades sindicales fuera de las horas del trabajo, o con el consentimiento del empleador, durante las horas de trabajo. El Art. 2° que expresa: 1. Las organizaciones de trabajadores y de empleadores deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de injerencia de unas respecto de las otras, ya se realice directamente o por medio de sus agentes o miembros, en su constitución, funcionamiento o administración. 2. Se considerarán actos de injerencia, en el sentido del presente artículo, principalmente, las medidas que tiendan a fomentar la constitución de organizaciones de trabajadores dominadas por un empleador o una organización de empleadores, o a sostener económicamente, o en otra forma, organizaciones de trabajadores con el objeto de colocar estas organizaciones bajo el control de un empleador o de una organización de empleadores. De igual modo el Convenio 135 sobre los representantes de los trabajadores del año 1971, que no ha sido ratificado por Argentina y que en la actualidad cuenta con 74 ratificaciones (4), en su artículo 1° determina que "los representantes de los trabajadores en la empresa deberán gozar de protección eficaz contra todo acto que pueda perjudicarlos, incluido el despido por razón de su condición de representantes de los trabajadores, de sus actividades como tales, de su afiliación al Sindicato, o de su participación en la actividad sindical, siempre que dichos representantes actúen conforme a las leyes, contratos colectivos u otros acuerdos comunes en vigor". En consecuencia, considero que el despido realizado por la demandada resulta contrario a lo normado por los arts 52 y cctes de la ley 23.551, como asimismo de los convenios internacionales ratificados por nuestro país, por lo que corresponde hacer lugar a la demanda instaurada por la Profesora Sra María Florencia Jotale Mora y por SADOP, en contra del Colegio Giosue Carducci, ordenando a la citada accionada que RESTITUYA a la actora en las mismas condiciones de trabajo, en cuanto a su puesto y lugar de prestación, en que se encontraban y asimismo SE LE PERMITA EL ACCESO a su lugar habitual de trabajo, medida que deberá cumplirse en el plazo de 24 hs. de notificada la presente, bajo apercibimiento de imponer astreintes (conf. Art. 666 bis del Código Civil) y de considerar al titular de la entidad demandada incurso en el delito de desobediencia judicial. Asimismo se condena a la accionada al pago de los salarios caídos, calculados desde el día del despido y hasta su efectiva reinstalación, por lo que los mismos serán calculados una vez producida la correspondiente reinstalación.-

COSTAS: Atento al resultado arribado, las mismas se imponen a la vencida, en mérito al principio objetivo de la derrota (art 105 primer párrafo del CPC YC supletorio).-

HONORARIOS: Atento a la naturaleza del planteo resuelto y careciendo el mismo de monto, una vez firme la presente deberán las partes arrimar las bases a los fines de la regulación a practicarse.-

Por ello

RESUELVO

I.- HACER LUGAR a la demanda instaurada por la Profesora Sra María Florencia Jotale Mora y por SADOP, en contra del Colegio Giosue Carducci, ordenando a la citada accionada que RESTITUYA a la actora en las mismas condiciones de trabajo, en cuanto a su puesto y lugar de prestación, en que se encontraban y asimismo SE LE PERMITA EL ACCESO a su lugar habitual de trabajo, medida que deberá cumplirse en el plazo de 24 hs. de notificada la presente, bajo apercibimiento de imponer astreintes (conf. Art. 666 bis del Código Civil) y de considerar al titular de la entidad demandada incurso en el delito de desobediencia judicial. Asimismo se

condena a la accionada al pago de los salarios caídos, calculados desde el día del despido y hasta su efectiva reinstalación, por lo que los mismos serán calculados en la etapa de ejecución de sentencia.-

II.- COSTAS: Como se consideran.-

III.- HONORARIOS: Oportunamente.-

HAGASE SABER

Ante Mí.-

AC-1982/13